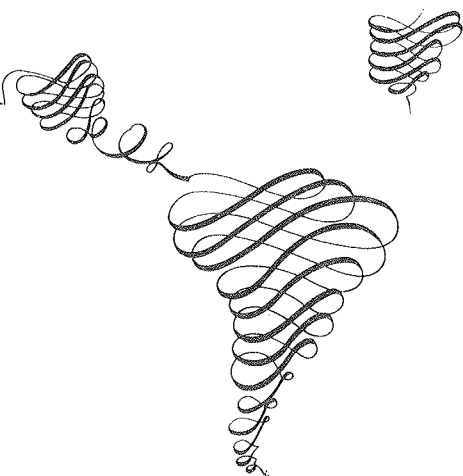




La política económica, ¿gestión de lo inevitable?

SON ya suficientes los datos de que disponemos para predecir que 1992 será un año de vacas semiflacas, ya incoado en el último tercio de 1990. Conviene no ser alarmistas y decir de entrada que la nuestra es la flaqueza del hombre gordo, ya que ocupamos el 11.º lugar del mundo por el PIB y el 42 por el PIB per cápita (más de 13.000 dólares al cambio oficial del 20 de diciembre de 1991, 2,3 veces superior al de Portugal). Nuestras dificultades serían situaciones de fortuna para el 80 por 100 de la población mundial. Lamentarnos en exceso constituiría una injuria gravísima para la geografía del hambre, que ha visto ampliados sus crónicos escenarios con la adición de los territorios del extinto socialismo real. Pero, hecha esta reserva de conciencia, las previsiones económicas son negativas, sobre todo si las comparamos con la situación de bonanza nacional e internacional que caracterizó los años 86-90. Y en este juicio de prospectiva coinciden, bien que por motivos diferentes, tanto los trabajadores como los empresarios y la propia Administración.

Los trabajadores, por ojos de los sindicatos, observan los meses venideros como un aluvión de recortes en las condiciones salariales y de agravamiento del desempleo. No

creen que la inflación pueda ser controlada y tienen la certeza de que su poder adquisitivo se deteriorará seriamente en el curso del año. Por otra parte, acusan al gobierno de haber generado una costra de insensibilidad social y de hacer recaer la carga fiscal indiscriminadamente sobre el conjunto de los ciudadanos, mediante la elevación del IVA (del 12 al 13 por 100) y de otros impuestos indirectos, en lugar de mantener el carácter progresivo que representan los impuestos directos sobre renta y patrimonio. El conflicto de HUNOSA tiene tanta repercusión porque precisamente actúa como catalizador de temores más amplios. Los planes de reconversión de la minería son rechazados por los trabajadores, no porque éstos no acepten la racionalidad del cierre de pozos en Asturias y León, sino porque tales cierres no van acompañados de planes o incentivos creíbles para la reindustrialización de la zona. Pocos justifican en este contexto las deseconomías de ciertas inversiones como el AVE o el inexistente control de determinados capítulos del gasto público. El malestar entre los mineros ha desbordado incluso los cauces sólidamente reivindicativos de los sindicatos y todo parece indicar que es inevitable una nueva huelga general, como la ya famosa del 14-D o la más reciente de Asturias.

LA patronal se lamenta de la caída de los beneficios empresariales, del aumento de los valores catastrales, de que se haya incrementado la cotización empresarial por desempleo, de que se hayan perdido mercados, de que se prevea un crecimiento de nuestro déficit por cuenta corriente hasta el 3,2 del PIB, sólo superado dentro de la CE por el de Grecia (3,4 por 100), del aumento del precio del combustible, de los efectos negativos para el crédito privado, de la creciente necesidad de financiación de la Administración, lo que provocará un exceso de demanda de dinero que mantendrá su precio varios puntos por encima de la media comunitaria y hará, consecuentemente, menos competitivas a nuestras empresas, etc.

El propio Gobierno, cuyo pensamiento económico se expresa meridianamente en los Presupuestos Generales del Estado,

reconoce las dificultades venideras: se retrasa la financiación del Plan de Carreteras, desciende en el 3,4 la masa de créditos para conservación y mejora de las obras públicas y existen incluso sospechas de que la reforma educativa en marcha puede sufrir un retraso en su calendario de aplicación por dificultades de financiación.

Las cosas van a ser así. Pero, ¿podrían ser de otro modo?, ¿cabría una actuación del Gobierno que, sin dejar de ser ortodoxa, cambiara las previsiones? Mucho nos tememos que no. Si, por ejemplo, se rebajara el interés interbancario, los más de 60.000 millones de dólares en divisas que, atraídos por la alta remuneración, se han acumulado en el Banco de

España, se esfumarían como el vapor, la inflación se desbordaría y nuestro diferencial competitivo con Europa, en lugar de disminuir, crecería de forma irreparable. Si el Estado incrementara sus inversiones hasta el punto de enjugar parte del desempleo, su ya espectacular endeudamiento (no olvidemos que los intereses de la deuda pública ascienden ya a más de 5.000 millones diarios) nos colocaría al borde de la bancarrota. Si la presión fiscal sobre rentas, patrimonio y beneficios empresariales fuera superior, muchos capitales, inversión potencial, emigrarían y crearían riqueza en otros países. Si, para acallar la protesta, se diera marcha atrás en HUNOSA, además de agravar, con la acumulación de nuevas pérdidas, la ineludible solución del problema, dejaríamos de recibir de la CE retornos que superan con creces el costo de las jubilaciones anticipadas que se ofrecen. Y así otras muchas cosas.

EL Gobierno está atrapado en su propia ortodoxia y en los compromisos de futuro con Europa. Su ortodoxia, no contradicha por los empresarios y mal comprendida por los trabajadores, le impone el objetivo prioritario de controlar la inflación y hacer desarrollo sin desarrollismo. Su compromiso europeo, ratificado en la reunión de Maastricht (8-10 de diciembre) le obliga a crear las condiciones necesarias para que, antes de 1999, España pueda entrar en la unidad económica y monetaria. Los

proyectos conjuntos se elaboran con la intención de hacer posible su cumplimiento y España debe hacer lo necesario para cumplir su parte en lo que acordó construir. Por otra parte, nuestro país ha recorrido ya medio camino en esta dirección: ha efectuado un severo saneamiento de los sectores naval y siderúrgico, está acometiendo el saneamiento del sector minero y ha aceptado gravosos peajes en materia agrícola y pesquera. Relajar ahora la disciplina de la marcha equivaldría a arrojar por la borda y declarar solemnemente inútiles diez años de sacrificio.

DE la descripción precedente se infiere una reflexión que desborda claramente el análisis de coyuntura: en una economía de mercado, la capacidad de modificar la situación por medio de una política económica a escala nacional es siempre relativa. Porque muchos factores son exógenos, y por lo mismo incontrolables, porque quiera o no debe someterse a dinámicas globales, porque la historia económica ha demostrado hasta la saciedad que no cabe el experimentalismo, porque las concesiones a la popularidad o la demagogia sólo consiguen pan para hoy y hambre para mañana... Por todo ello, debemos pedir al gobierno que, si no puede ortodoxamente modificar la realidad, sea al menos buen gestor de lo inevitable.